NARCOTRAFICO

ENTRE LA GUERRA Y EL SHOW

Por Andrea Ferrari

Los primeros desperfectos se sintieron cuando el Piper Azteca sobrevolaba la cordillera salteña. El piloto brasileño, Roberto Magalhaes Galucci, sugirió un aterrizaje forzoso. Le preocupaban las 181 bolsas prolijamente ocultas en el piso y las alas del avión que debían llegar sanas y salvas a su destino final en Estados Unidos. Pero la maniobra no funcionó: ante los ojos aterrorizados de los cuatro ocupantes la quebrada Del Mojón se fue acercando hasta que ya no la vieron. Con el impacto se rompieron 25 bolsas; el viento cordillerano se encargó de esparcir el polvo blanco por la quebrada.

Era el 19 de setiembre. Cuatro días después un helicóptero de Gendarmería Nacional ubicó los restos del avión y los cuerpos de los ocupantes. Los 200 kilos de cocaína que contenían los paquetes constituían la mayor carga decomisada en Sudamérica. Habían partido de Campo Grande, Brasil y tras hacer escala en Asunción –donde aparentemente se cargó la droga– y en Salta se dirigían a Antofagasta. Los otros puntos previstos del viaje eran Lima, Panamá y Miami.

El trayecto no era casual. Según los expertos en narcotráfico, Argentina es, en materia de cocaína, apenas un ''país de tránsito'', si bien señalan que los índices de consumo están creciendo y se han encontrado algunos laboratorios clandestinos. Pero los cargamentos más importantes sólo hacen escala aquí para seguir viaje hacia Estados Unidos, el principal comprador mundial. El tráfico de marihuana de mayor relevancia internacional es el que viaja hacia ese país desde América del Sur. En 1985, México abasteció el 32 por ciento del consumo americano y Colombia el 31. Para la cocaína, Colombia mantiene todavía el primer puesto: acapara el 75 por ciento del consumo norteamericano. Le siguen Bolivia, que provee el 10-15 por ciento de esos consumidores, Perú –entre el 5 y 10– y finalmente Ecuador, Argentina, Brasil y Chile, que envían entre los cuatro un cinco por ciento más.

En el último tiempo, autoridades de la División Estupefacientes de Gendarmería Nacional y de la Administración de Aduanas han asegurado que se incrementó el consumo de drogas en Argentina. El parámetro para medir el incremento de los índices son los decomisos en los últimos años: en 1984 se secuestraron 13 kilos de cocaína, en 1985, 62, en 1986, 110 y, en lo que va

Realización gráfica Cursi-Iglesias

"La guerra contra las drogas... Esa maravillosa guerra contra un enemigo perfecto, lo suficientemente fuerte para movilizar toda la energía de una nación, lo suficientemente débil para no ser nunca realmente peligroso y así poder seguir la guerra mientras el sistema social necesite una guerra..." (Nils Christie)



NARCOTRAFICO

ENTRE LA GUERRA Y EL SHOW

de este año 345, cifra que incluye la carga del avión caído en Salta. Sin embargo, habría que matizar esos datos con la cantidad de procedimientos, que también aumentó: de 232 en 1984 a 322 en 1985, 355 en 1986 y 203 en el primer semestre de 1987.

La situación parece más grave en los titulares que en la realidad. Recientemente *La Nación* tituló: "El narcotráfico y el consumo de drogas aumentaron en el país". *La Prensa* fue aún más contundente: "Somos un país que consume marihuana y en gran escala", decía en junio. El jefe de la División Estupefacientes de Gendarmería, Jorge Vázquez, se lo toma con más calma: "Hay que desmitificar el problema, que aquí no es alarmante. Entre quienes consumen droga, un 80 por ciento son abusadores, no adictos. Las que detectamos son marihuana, hoja de coca y clorhidrato de cocaína. Hay, además, otras drogas lícitas, con las que la policía no interviene porque la fiscalización es de orden sanitario: medicamentos con los que se verifica un gran abuso. Tal vez ése sea un problema más grave."

Los países suelen categorizarse según su relación con la droga en productores –como Bolivia y Perú–, países "laboratorio", que realizan el proceso químico –como Colombia–, los de "tránsito" que no son más que un lugar de paso y los consumidores. Argentina es considerado de tránsito para la cocaína y consumidor para la marihuana y la hoja de coca. "Acá no hay mafias internacionales de narcotraficantes –explica Vázquez–, casi todas las investigaciones se han realizado sobre correos o "mulas": los que llevan la droga en su cuerpo o equipaje. La producción, aun de marihuana, es mínima. Hemos detectado algunas plantaciones en El Bolsón, la más significativa de 97 ejemplares: nosotros podemos llegar a contar las plantas, mientras que en otros lados se cuentan las hectáreas".

El Robin Hood de la droga

En Colombia y Bolivia el poder del narcotráfico es mucho mayor y también su incidencia en la economía. Este año, las exportaciones de estaño y gas natural le reportarán a Bolivia unos 400 millones de dólares; el tráfico de drogas producirá el doble de esa suma. Se calcula que la cocaína producida en el país se acerca a las 200.000 toneladas, de las cuales se exportó un 90 por ciento. En la actividad participan tanto bandas internacionales como campesinos: según el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Bolivia, 50.000 familias viven de la producción de hoja de coca.

Colombia tiene el privilegio de ser el primer laboratorio del mundo. El tráfico está controlado por el "Cartel de Medellín", un grupo que hasta hace poco tiempo dirigían Carlos Ledher, Pablo Escobar y Jorge Ochoa. Ledher fue capturado el pasado febrero y está a punto de ser juzgado en Estados Unidos. El objetivo del negocio colombiano es claramente exportar: de las 60 toneladas de cocaína que se producen anualmente, sólo cuatro se consumen en el país. El resto se destina al mercado norteamericano y en menor escala al europeo.

El poder de los grupos narcotraficantes y el dominio que ejercen en determinadas zonas creció en pocos años.

En 1984 la lista de personas asesinadas por orden de la mafia incluía a 30 jueces, un ministro de Justicia, cientos de policías y varios periodistas, entre ellos el director del diario más antiguo del país. A medida que se fueron enriqueciendo, los narcotraficantes colombianos intentaron hacerse más populares y extender su radio de acción hasta el terreno de la política. Pablo Escobar –hoy prófugo– recibió el nombre de Robin Hood cuando hizo construir una pista de patinaje y varias canchas de fútbol en los barrios pobres de su ciudad natal. También fundó una asociación llamada "Medellín sin casas pobres", que construyó 200 viviendas para familias carenciadas. El y Carlos Ledher hicieron traer cientos de animales de todas partes del mundo y abrieron grandes jardines zoológicos gratuitos.

Si bien la mafia sigue conservando poder, hoy está en decadencia con respecto a otras épocas doradas. Los primeros signos aparecieron en 1984, cuando el mercado norteamericano llegó a un grado de saturación tal que el precio del kilo de cocaína bajó a la mitad. El "Cartel de Medellín" había instalado el año anterior, en la región de Llanos Orientales, uno de los complejos más grandes del mundo: 80 técnicos y empleados, protegidos por decenas de hombres armados, 14 laboratorios y una capacidad de producción que podía alcanzar las dos toneladas y media de cocaína por mes. Lo llamaban "Tranquilandia". Pero el 10 de marzo de 1984 la policía colombiana los sorprendió: arrestó a 40 personas, destruyó más de 1000 kilos de cocaína y decomisó siete aviones y una gran cantidad de productos químicos. Aunque los jefes seguían en libertad, la organización perdió más de mil millones de dólares. Este año, la captura y extradición de Ledher y una quincena de otros jefes menores fue un golpe aún más duro.

El trampolín venezolano

Dos mil kilómetros de mal vigilada frontera con Colombia también han convertido a Venezuela en un punto estratégico para los narcotraficantes. El asesinato de nueve miembros de la Guardia Nacional en la zona selvática de Perijá el pasado junio fue una muestra de la importancia que le han asignado al país como trampolín en el tráfico a Estados Unidos y Europa. Se calcula que circulan unas 25 toneladas de cocaína por año, en su mayor parte producida en Bolivia y procesada en Colombia.

El mayor cargamento en la historia de Venezuela fue descubierto en octubre del año pasado, cuando autoridades de Florida sospecharon que no eran precisamente talco los 3200 kilos de polvo blanco que transportaba en sus contenedores un barco despachado en el puerto de La Guaira. En lo que va de 1987 el volumen de cocaína capturada llega a 421 kilos y el número de detenidos a 25, entre ellos un diputado. Porque en el negocio no sólo participan traficantes: en este momento están siendo investigados por el Consejo de la Judicatura 25 jueces por supuestas "actuaciones irregulares".

Otra señal de la corrupción fue el pedido del fiscal general de la República, Héctor Serpa Arcas, que en un dramático mensaje solicitó a los abogados en ejercicio que renunciaran a los crecidos honorarios que suelen pagar los narcotraficantes. La actividad se ha infiltrado, incluso, en el lenguaje. Recientemente el presidente de la comisión parlamentaria antidrogas habló de una nueva categoría social: policías narcoinformadores y narcodesinformadores, jueces narcocomplacientes, políticos narcotolerantes, militares narcoatrapados, capitalistas narcofinancieros y comunicadores narcodisimuladores. El narcolenguaje es tan amplio que sigue adaptándose para dar nombre a todos los que quieran entrar en el negocio.



Foto-símbolo: Un soldado boliviano y atrás una planta de coca.
Las tropas americanas no lograron terminar con el narcotráfico en Bolivia.

DROGA BLANCA CUENTAS NEGRAS

La cifra es apabullante: unos 300.000 millones de dólares entran anualmente en las arcas de los narcotraficantes de todo el mundo. En 1982 esa cantidad llegaba sólo a los 72.000 millones, en ese momento similar al Producto Bruto Interno de Austria. La suma actual ha dejado muy atrás a los austríacos y se acerca al PBI de Francia, quinta potencia económica del mundo.

Obviamente, las ganancias no benefician de igual manera a todos los participantes de la actividad; a medida que va recorriendo los diferentes circuitos la droga multiplica su valor. Los campesinos, por ejemplo, venden en 250 dólares 500 kilos de hojas de coca, que se convertirán luego en dos kilos y medio de pasta, con un valor de entre 1000 y 2000 dólares. Esa cantidad pasa a ser un kilo de cocaína base y cuesta unos 5000-10.000 dólares; cuando alcanza el estadio de hidroclorato de cocaína ya ha ascendido a 8000-15.000 dólares. Al introducirse en la costa este de Estados Unidos el mismo kilo oscila entre los 36.000 y los 38.000 dólares; los mayoristas lo cortan por la mitad y duplican su valor. Cuando llega a la calle, el kilo de 100 por ciento de cocaína ha sido cortado, término medio, al doce por ciento de pureza y rinde a su vendedor unos 800.000 dólares.

Estas cifras astronómicas se utilizan para fines muy diversos. Una parte retorna al circuito ilegal y sirve para mantener y ampliar los negocios o alimentar otros, como el tráfico de metales preciosos, armas, la falsificación de moneda, etc. Otra parte más voluminosa entra en la economía legal de los países de origen o los destinatarios y se invierte en inmobiliarias, hotelería, grandes tiendas, casinos.

Pero la cantidad más importante de las ganancias es transportada en forma líquida a los *paraísos fiscales* del sistema bancario internacional. Algunos de los más utilizados son Andorra, Bahamas, Hong-Kong, Irán, Irak, Libia, Liechtenstein, Mónaco y Panamá. Suiza y Londres no están considerados zonas bancarias libres, aunque en la práctica pueden funcionar como tales.

Los bancos de los *paraísos fiscales* suelen facilitar cuentas fiduciarias numeradas y secretas, donde los nombres de los depositarios se mantienen separados de las cuentas. La mayoría de estos países tiene un sistema de constitución de entidades comerciales y de cartera de inversiones que proporcionan al usufructuario un alto grado de anonimato. Las sociedades pueden realizar transacciones comerciales dentro y fuera del país, administradas por un agente comercial que aparece como el ejecutivo residente. Los abogados locales que constituyeron la sociedad quedan en los documentos como funcionarios y directores; el verdadero nombre del usufructuario se registra sólo en los libros de una oficina de gobierno, que los mantiene en secreto, tornando muy difícil el acceso para tribunales y funcionarios extranjeros.

Una cuenta para narcodólares

Colombia tiene sus mecanismos propios para blanquear el dinero de la droga, que aporta unos 4500 millones de dólares anuales. Desde hace mucho existen allí dos economías paralelas: una legal, sobre la que se aplican impuestos, y otra clandestina, basada en la marihuana y la cocaína. En las primeras épocas del tráfico, la masa de dinero clandestino era repatriada de manera muy rudimentaria, en cajas de cartón, valijas u oculta en los barcos de los jefes de las bandas.

El gobierno de López Michelsen (1974-1978) cambió la situación al crear la llamada "cuenta de servicios": el Banco de la República abrió en sus agencias una cuenta donde podía depositarse la cantidad de dólares deseada, siempre que se los cambiara por pesos. La balanza de pagos, negativa a comienzos de la década del 70, se tornó ampliamente positiva a fines. Entre 1978 y 1979 las reservas de divisas pasaron de 600 a 1600 millones de dólares. Poco importaba que el precio del café, pilar de la balanza comercial de Colombia, sufriera fuertes bajas: la marihuana y la cocaína amortizaban los golpes.

Al mismo tiempo se desorganizaba la economía: la masa de dinero líquido entraba sin contribuir a la formación de un capital productivo y sin crear empleo; la tasa de inflación pasó del 8 al 13 por ciento anual. El Estado colombiano, por su parte, depositaba enormes sumas en Estados Unidos, a través de una cuenta especial. Un especialista en narcotráfico colombiano cuenta que en ese momento un avión de transporte Hércules llevaba a Estados Unidos, una vez por semana, una partida de millones de dólares que acababan de salir de allí. En 1981, uno de los mejores años para el tráfico colombiano, la famosa cuenta "de servicios" alcanzó los 1700 millones de dólares.

Eran otras épocas. Hoy la marihuana producida en California, las exportaciones de cocaína de Perú y Bolivia y el desarrollo de una producción local de esa droga en Florida ponen en riesgo la industria de la droga. Los efectos podrán medirse en el futuro en los vaivenes de la economía colombiana.

NARCOTRAFICO

ENTRE LA GUERRA Y EL SHOW

de este año 345, cifra que incluye la carga del avión caído en Salta. Sin embargo, habría que matizar esos datos con la cantidad de procedimientos, que también aumentó: de 232 en 1984 a 322 en 1985, 355 en 1986 y 203 en el primer semestre de 1987.

La situación parece más grave en los titulares que en la realidad. Recientemente *La Nación* tituló: ''El narcotráfico y el consumo de drogas aumentaron en el país''. *La Prensa* fue aún más contundente: ''Somos un país que consume marihuana y en gran escala'', decía en junio. El jefe de la División Estupefacientes de Gendarmería, Jorge Vázquez, se lo toma con más calma: ''Hay que desmitificar el problema, que aquí no es alarmante. Entre quienes consumen droga, un 80 por ciento son abusadores, no adictos. Las que detectamos son marihuana, hoja de coca y clorhidrato de cocaína. Hay, además, otras drogas lícitas, con las que la policía no interviene porque la fiscalización es de orden sanitario: medicamentos con los que se verifica un gran abuso. Tal vez ése sea un problema más grave.''

Los países suelen categorizarse según su relación con la droga en productores –como Bolivia y Perú–, países ''laboratorio'', que realizan el proceso químico –como Colombia–, los de ''tránsito'' que no son más que un lugar de paso y los consumidores. Argentina es considerado de tránsito para la cocaína y consumidor para la marihuana y la hoja de coca. ''Acá no hay mafias internacionales de narcotraficantes –explica Vázquez–, casi todas las investigaciones se han realizado sobre correos o ''mulas'': los que llevan la droga en su cuerpo o equipaje. La producción, aun de marihuana, es mínima. Hemos detectado algunas plantaciones en El Bolsón, la más significativa de 97 ejemplares: nosotros podemos llegar a contar las plantas, mientras que en otros lados se cuentan las hectáreas''.

El Robin Hood de la droga

En Colombia y Bolivia el poder del narcotráfico es mucho mayor y también su incidencia en la economía. Este año, las exportaciones de estaño y gas natural le reportarán a Bolivia unos 400 millones de dólares; el tráfico de drogas producirá el doble de esa suma. Se calcula que la cocaína producida en el país se acerca a las 200.000 toneladas, de las cuales se exportó un 90 por ciento. En la actividad participan tanto bandas internacionales como campesinos: según el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Bolivia, 50.000 familias viven de la producción de hoja de coca.

Colombia tiene el privilegio de ser el primer laboratorio del mundo. El tráfico está controlado por el ''Cartel de Medellín'', un grupo que hasta hace poco tiempo dirigían Carlos Ledher, Pablo Escobar y Jorge Ochoa. Ledher fue capturado el pasado febrero y está a punto de ser juzgado en Estados Unidos. El objetivo del negocio colombiano es claramente exportar: de las 60 toneladas de cocaína que se producen anualmente, sólo cuatro se consumen en el país. El resto se destina al mercado norteamericano y en menor escala al europeo.

El poder de los grupos narcotraficantes y el dominio que ejercen en determinadas zonas creció en pocos años.

En 1984 la lista de personas asesinadas por orden de la mafia incluía a 30 jueces, un ministro de Justicia, cientos de policías y varios periodistas, entre ellos el director del diario más antiguo del país. A medida que se fueron enriqueciendo, los narcotraficantes colombianos intentaron hacerse más populares y extender su radio de acción hasta el terreno de la política. Pablo Escobar –hoy prófugo– recibió el nombre de Robin Hood cuando hizo construir una pista de patinaje y varias canchas de fútbol en los barrios pobres de su ciudad natal. También fundó una asociación llamada ''Medellín sin casas pobres'', que construyó 200 viviendas para familias carenciadas. El y Carlos Ledher hicieron traer cientos de animales de todas partes del mundo y abrieron grandes jardines zoológicos gratuitos.

Si bien la mafia sigue conservando poder, hoy está en decadencia con respecto a otras épocas doradas. Los primeros signos aparecieron en 1984, cuando el mercado norteamericano llegó a un grado de saturación tal que el precio del kilo de cocaína bajó a la mitad. El ''Cartel de Medellín'' había instalado el año anterior, en la región de Llanos Orientales, uno de los complejos más grandes del mundo: 80 técnicos y empleados, protegidos por decenas de hombres armados, 14 laboratorios y una capacidad de producción que podía alcanzar las dos toneladas y media de cocaína por mes. Lo llamaban ''Tranquilandia''. Pero el 10 de marzo de 1984 la policía colombiana los sorprendió: arrestó a 40 personas, destruyó más de 1000 kilos de cocaína y decomisó siete aviones y una gran cantidad de productos químicos. Aunque los jefes seguían en libertad, la organización perdió más de mil millones de dólares. Este año, la captura y extradición de Ledher y una quincena de otros jefes menores fue un golpe aún más duro.

El trampolín venezolano

Dos mil kilómetros de mal vigilada frontera con Colombia también han convertido a Venezuela en un punto estratégico para los narcotraficantes. El asesinato de nueve miembros de la Guardia Nacional en la zona selvática de Perijá el pasado junio fue una muestra de la importancia que le han asignado al país como trampolín en el tráfico a Estados Unidos y Europa. Se calcula que circulan unas 25 toneladas de cocaína por año, en su mayor parte producida en Bolivia y procesada en Colombia.

El mayor cargamento en la historia de Venezuela fue descubierto en octubre del año pasado, cuando autoridades de Florida sospecharon que no eran precisamente talco los 3200 kilos de polvo blanco que transportaba en sus contenedores un barco despachado en el puerto de La Guaira. En lo que va de 1987 el volumen de cocaína capturada llega a 421 kilos y el número de detenidos a 25, entre ellos un diputado. Porque en el negocio no sólo participan traficantes: en este momento están siendo investigados por el Consejo de la Judicatura 25 jueces por supuestas ''actuaciones irregulares''.

Otra señal de la corrupción fue el pedido del fiscal general de la República, Héctor Serpa Arcas, que en un dramático mensaje solicitó a los abogados en ejercicio que renunciaran a los crecidos honorarios que suelen pagar los narcotraficantes. La actividad se ha infiltrado, incluso, en el lenguaje. Recientemente el presidente de la comisión parlamentaria antidrogas habló de una nueva categoría social: policías narcoinformadores y narcodesinformadores, jueces narcocomplacientes, políticos narcotolerantes, militares narcoatrapados, capitalistas narcofinancieros y comunicadores narcodisimuladores. El narcolenguaje es tan amplio que sigue adaptándose para dar nombre a todos los que quieran entrar en el negocio.



Foto-símbolo: Un soldado boliviano y atrás una planta de coca.
Las tropas americanas no lograron terminar con el narcotráfico en Bolivia.

DROGA BLANCA CUENTAS NEGRAS

La cifra es apabullante: unos 300.000 millones de dólares entran anualmente en las arcas de los narcotraficantes de todo el mundo. En 1982 esa cantidad llegaba sólo a los 72.000 millones, en ese momento similar al Producto Bruto Interno de Austria. La suma actual ha dejado muy atrás a los austríacos y se acerca al PBI de Francia, quinta potencia económica del mundo.

Obviamente, las ganancias no benefician de igual manera a todos los participantes de la actividad; a medida que va recorriendo los diferentes circuitos la droga multiplica su valor. Los campesinos, por ejemplo, venden en 250 dólares 500 kilos de hojas de coca, que se convertirán luego en dos kilos y medio de pasta, con un valor de entre 1000 y 2000 dólares. Esa cantidad pasa a ser un kilo de cocaína base y cuesta unos 5000-10.000 dólares; cuando alcanza el estadio de hidroclorato de cocaína ya ha ascendido a 8000-15.000 dólares. Al introducirse en la costa este de Estados Unidos el mismo kilo oscila entre los 36.000 y los 38.000 dólares; los mayoristas lo cortan por la mitad y duplican su valor. Cuando llega a la calle, el kilo de 100 por ciento de cocaína ha sido cortado, término medio, al doce por ciento de pureza y rinde a su vendedor unos 800.000 dólares.

Estas cifras astronómicas se utilizan para fines muy diversos. Una parte retorna al circuito ilegal y sirve para mantener y ampliar los negocios o alimentar otros, como el tráfico de metales preciosos, armas, la falsificación de moneda, etc. Otra parte más voluminosa entra en la economía legal de los países de origen o los destinatarios y se invierte en inmobiliarias, hotelería, grandes tiendas, casinos.

Pero la cantidad más importante de las ganancias es transportada en forma líquida a los *paraísos fiscales* del sistema bancario internacional. Algunos de los más utilizados son Andorra, Bahamas, Hong-Kong, Irán, Irak, Libia, Liechtenstein, Mónaco y Panamá. Suiza y Londres no están considerados zonas bancarias libres, aunque en la práctica pueden funcionar como tales.

Los bancos de los *paraísos fiscales* suelen facilitar cuentas fiduciarias numeradas y secretas, donde los nombres de los depositarios se mantienen separados de las cuentas. La mayoría de estos países tiene un sistema de constitución de entidades comerciales y de cartera de inversiones que proporcionan al usufructuario un alto grado de anonimato. Las sociedades pueden realizar transacciones comerciales dentro y fuera del país, administradas por un agente comercial que aparece como el ejecutivo residente. Los abogados locales que constituyeron la sociedad quedan en los documentos como funcionarios y directores; el verdadero nombre del usufructuario se registra sólo en los libros de una oficina de gobierno, que los mantiene en secreto, tornando muy difícil el acceso para tribunales y funcionarios extranjeros.

Una cuenta para narcodólares

Colombia tiene sus mecanismos propios para blanquear el dinero de la droga, que aporta unos 4500 millones de dólares anuales. Desde hace mucho existen allí dos economías paralelas: una legal, sobre la que se aplican impuestos, y otra clandestina, basada en la marihuana y la cocaína. En las primeras épocas del tráfico, la masa de dinero clandestino era repatriada de manera muy rudimentaria, en cajas de cartón, valijas u oculta en los barcos de los jefes de las bandas.

El gobierno de López Michelsen (1974-1978) cambió la situación al crear la llamada ''cuenta de servicios'': el Banco de la República abrió en sus agencias una cuenta donde podía depositarse la cantidad de dólares deseada, siempre que se los cambiara por pesos. La balanza de pagos, negativa a comienzos de la década del 70, se tornó ampliamente positiva a fines. Entre 1978 y 1979 las reservas de divisas pasaron de 600 a 1600 millones de dólares. Poco importaba que el precio del café, pilar de la balanza comercial de Colombia, sufriera fuertes bajas: la marihuana y la cocaína amortizaban los golpes.

Al mismo tiempo se desorganizaba la economía: la masa de dinero líquido entraba sin contribuir a la formación de un capital productivo y sin crear empleo; la tasa de inflación pasó del 8 al 13 por ciento anual. El Estado colombiano, por su parte, depositaba enormes sumas en Estados Unidos, a través de una cuenta especial. Un especialista en narcotráfico colombiano cuenta que en ese momento un avión de transporte Hércules llevaba a Estados Unidos, una vez por semana, una partida de millones de dólares que acababan de salir de allí. En 1981, uno de los mejores años para el tráfico colombiano, la famosa cuenta ''de servicios'' alcanzó los 1700 millones de dólares.

Eran otras épocas. Hoy la marihuana producida en California, las exportaciones de cocaína de Perú y Bolivia y el desarrollo de una producción local de esa droga en Florida ponen en riesgo la industria de la droga. Los efectos podrán medirse en el futuro en los vaivenes de la economía colombiana.

Traficantes de heroína

EL PRINCIPE DE LA OSCURIDAD

A Khun Sa le dicen el príncipe de la oscuridad. Con un ejército de 6000 soldados, controla una zona del triángulo de oro, el área de cultivo de opio de Birmania, Tailandia y Laos. Pero dice que no está en el negocio de la droga por gusto: su único objetivo, asegura, es proteger a su gente y crear un Estado independiente.

En el triángulo de oro se recogen unas 900 toneladas de opio por año, con las que se elaboran 90 de heroína pura. Recientemente, la Drug Enforcement Administration (DEA), organismo antidroga norteamericano, reveló que el porcentaje de heroína del sudeste asiático progresa en forma ascendente desde hace cinco años. En 1982, la que se consumía en Nueva York procedía en un 93 por ciento del sudoeste asiático (Pakistán, Irán y Afganistán) y sólo en un 3 por ciento del triángulo. Para este año, se prevé que esa zona abastecerá a un 40 por ciento de los adictos neoyorquinos.

Khun Sa asegura que cualquiera puede comprar su cosecha si la paga lo suficiente para alimentar y vestir a su pueblo. En 1977 hizo un ofrecimiento concreto: todo el opio del que disponía –unas 400 toneladas– a cambio de 20 millones de dólares. Su idea fue objeto de varios debates en el Senado norteamericano y finalmente rechazada. ''No acabarán con el problema ni aunque prosigan esta guerra durante otros sesenta años'', dice.

''No soy más que una cabeza de turco para enriquecer a los burócratas de la DEA y a los agentes de narcóticos, que me necesitan para su propio beneficio. Las ganancias del mercado mundial de la droga se consiguen en Estados Unidos.'' Según Khun Sa sólo hay dos grupos de personas que desean erradicar verdaderamente el opio: los padres de los adictos y su pueblo.

El príncipe de la oscuridad tiene una respuesta preparada para quienes le hablan de la destrucción que provoca la heroína en los consumidores: ''¿Le importa algo a Occidente el pueblo hambriento de Birmania? Si nos dan los recursos paa introducir cultivos sustitutivos podrán destruir nuestra heroína''.

El kilo de opio se vende en el campo de Khun Sa por unas 40 libras esterlinas (unos 177 australes), mientras que en Londres llega a las 120.000 libras (aproximadamente 530.000 australes). Los campesinos que lo cultivan, en cambio, reciben por la misma cantidad sólo cuatro libras (18 australes).

Khun Sa dice que su ambición ahora es ser ministro de economía en un Estado Shan independiente. ''La venta del opio es para ayudar a mi pueblo –insiste–, que es demasiado pobre para cultivar otra cosa. Lucho por la liberación de mi país.''

Se ha puesto un precio de un millón de bhat tailandeses (unos 25.000 dólares) a la cabeza de Khun Sa. El, a su vez, ofrece unos 5000 bhat, unos 140 dólares, por cada agente de la DEA que lo busca.

Ronald Reagan: Cuando era estrella de la película *Hong Kong* enviaba cigarrillos a todos sus amigos en las navidades, según revelan los avisos publicitarios de la época. Siendo presidente dejó de fumar y comenzó a enviar armas a los contras.

LA CONTRA-COCAINA

Por Walter Goobar

Ronald Reagan ama a los contras y odia las drogas. El presidente norteamericano ha declarado públicamente su anhelo de alistarse como voluntario en estas dos cruzadas modernas. Durante un largo período, que se cortó abruptamente hace algunos meses, Reagan y su primera dama Nancy solían aludir con insistente frecuencia a estos dos temas, llegando incluso a anudarlos en uno solo, en todos y cada uno de los discursos que pronunciaban desde la Casa Rosada.

El 17 de julio de 1984 el diario *Washington Times*, de propiedad de la secta Moon, acusó al gobierno sandinista de Nicaragua de participar en el tráfico de drogas. El periódico basaba su informe en fuentes anónimas de la administración Reagan que citaban el testimonio de Federico Vaughan, un traficante de drogas convicto que había trabajado como informante norteamericano en Centroamérica.

El 16 de marzo de 1986, cuando aún se dudaba si el Congreso aprobaría la ayuda de 100 millones de dólares a los contras nicaragüenses, que finalmente concedió, Reagan declaraba a una cadena nacional de televisión: ''Yo sé que los padres americanos que están preocupados por el problema de la droga se van a enfurecer al enterarse de que altos miembros del gobierno de Nicaragua están seriamente involucrados en el tráfico de drogas''. En el momento adecuado la cámara mostró una fotografía en blanco y negro en la que se pudo ver un avión de carga de tipo C-123 K en una pista de aterrizaje cercana a Managua, cargado con lo que se decía era cocaína.

''Obviamente los sandinistas no dejan de lado ningún acto criminal. Es un régimen sin ley'', remató Reagan.

Estados Unidos considera que la lucha contra el sandinismo y el narcotráfico deben reunirse en un mismo canal operativo de contrainsurgencia, con lo que se posibilita que los ejércitos sean autorizados para intervenir en situaciones internas y, de hecho, permite mantener en vigencia la Doctrina de Seguridad Nacional bajo el manto de la lucha contra el narcoterrorismo.

''Señor general: el ejército de mi país no tiene como hipótesis de conflicto la guerra contra el narcoterrorismo. Más aún, en el proyecto de Ley de Defensa enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, se estipula que las Fuerzas Armadas sólo pueden ser empleadas ante agresiones de origen externo'', respondió el canciller Dante Caputo al ex comandante de la zona sur del ejército estadounidense y actual jefe de la OTAN en Europa, John Galvin.

''Nuestras fuerzas armadas no son policías internas'', alcanzó a explicar diplomáticamente Caputo, al tiempo que Galvin se ponía la gorra ofuscado y enfilaba hacia la puerta del despacho ministerial, luego de un seco y poco protocolar ''buenos días''. Detrás de Galvin marchó el coronel Gómez Sabaini que, en noviembre próximo, oficiará como secretario de la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizará en Mar del Plata.

El escándalo de *Irangate* y más específicamente el juicio al coronel Oliver North han hecho que Ronald Reagan, en los últimos meses, evite las alusiones directas al narcoterrorismo. En el juicio contra North quedó establecido que el avión C-123 K que Reagan esgrimió como prueba de las vinculaciones del sandinismo con el narcotráfico, había sido comprado en 1984 por el general Richard Secord a la aerolínea Southern Air Transport (administrada por la CIA), provisto de cámaras ocultas y entregado a la Oficina Antinarcóticos (DEA) como parte del programa elaborado por Oliver North para conseguir apoyo y finanzas para los contras. Irónicamente, ese mismo C-123 K transportó en octubre de 1986 de Nicaragua a los EE.UU. al norteamericano Eugene Hasenfus, el piloto del avión abatido en territorio nicaragüense mientras realizaba tareas de aprovisionamiento de los contras.

Un estudio realizado por la prestigiosa revista *Columbia Journalism Review* titulado ''Narcoterrorismo: La historia de dos cuentos'', señala que ninguna de las cadenas periodísticas norteamericanas mencionaron que en el proceso seguido contra Federico Vaughan, en Miami, no se encontraron evidencias sobre la pretendida vinculación de la dirigencia sandinista en el tráfico de drogas. En cambio, la participación de los contras en ese comercio ilegal fue sistemáticamente silenciada durante, por lo menos, los dos años en que el Congreso prohibía la ayuda a los antisandinistas –concluye la misma fuente–. A comienzos de 1985 dos experimentados periodistas de la agencia Associated Press, Brian Barger y Robert Parry, intentaron publicar una investigación de la que se desprendía que los aviones provistos por la CIA para el abastecimiento a los contras transportaban cocaína en los vuelos hacia los EE.UU. La investigación fue censurada y apareció publicada en forma parcial y distorsionada en el servicio español recién a fines de 1985. Parry y Barger finalmente renunciaron.

Según las evidencias reunidas por el senador demócrata por Massachusetts, John Kerry, para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, el tráfico de drogas constituyó uno de los pilares básicos de la doctrina Reagan para la democracia de América Central.

El caso de la familia de Jorge Ochoa, uno de los dos grandes exportadores de drogas de Colombia, es el que mejor ilustra las conexiones del gobierno estadounidense con esa actividad. Según los testimonios que obran en poder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la Agencia Central de Inteligencia obtenía la cocaína directamente del clan Ochoa en Colombia. Para transportar la sustancia la CIA reclutó pilotos que trasladaban la mercancía desde el norte de aquel país hasta los aeropuertos de reabastecimiento de combustible en la jungla de Costa Rica, donde se realizaba el entrecruzamiento entre el contrabando de drogas y las operaciones militares de los contras. Un agente de operaciones de la CIA, John Hull, permitía el aterrizaje de las avionetas de los traficantes para cargar combustible y almacenar la cocaína antes de que ésta fuese despachada hacia los EE.UU. A cambio, los traficantes pagaban derecho de uso por las pistas y en los viajes de vuelta desde Miami transportaban cargas para los antisandinistas.

En junio de 1987, el reputado periodista norteamericano Jack Anderson recibió una copia de las actas secretas de la sesión de la Dirección Nacional de Lucha contra la Droga, que presidió el fiscal general Edwin Meese, el 19 de febrero de este año. El director adjunto de la CIA Richard Kerr fue consultado sobre la supuesta participación cubana o nicaragüense en el narcotráfico: ''Richard Kerr señaló que no existían pruebas para acusar al gobierno cubano y que la participación de los sandinistas habría sido esporádica''. Los analistas en los crípticos mensajes que se manejan en los servicios de inteligencia y en la diplomacia interpretan que la declaración del jefe adjunto de la CIA apuntó a dar por cerrado el famoso episodio iniciado cuando el presidente Reagan blandió frente a las cámaras de televisión una foto en blanco y negro que supuestamente constituía la prueba definitiva contra el gobierno nicaragüense.

El estudio del *Columbia Journalism Review* cita a un anónimo ejecutivo de la influyente cadena CBS, que a modo de excusa explicó: ''Para la primera historia había fotos. Independientemente de dónde hayan salido, parecían apoyar las tesis de la administración Reagan. En el caso de la historia de los contras, tendríamos que haber ido a América Central para seguirle el rastro''.

Traficantes de heroína

EL PRINCIPE DE LA OSCURIDAD

A Khun Sa le dicen el príncipe de la oscuridad. Con un ejército de 6000 soldados, controla una zona del triángulo de oro, el área de cultivo de opio de Birmania, Tailandia y Laos. Pero dice que no está en el negocio de la droga por gusto: su único objetivo, asegura, es proteger a su gente y crear un Estado independiente.

En el triángulo de oro se recogen unas 900 toneladas de opio por año, con las que se elaboran 90 de heroína pura. Recientemente, la Drug Enforcement Administration (DEA), organismo antidroga norteamericano, reveló que el porcentaje de heroína del sudeste asiático progresa en forma ascendente desde hace cinco años. En 1982, la que se consumía en Nueva York procedía en un 93 por ciento del sudoeste asiático (Pakistán, Irán y Afganistán) y sólo en un 3 por ciento del triángulo. Para este año, se prevé que esa zona abastecerá a un 40 por ciento de los adictos neoyorquinos.

Khun Sa asegura que cualquiera puede comprar su cosecha si la paga lo suficiente para alimentar y vestir a su pueblo. En 1977 hizo un ofrecimiento concreto: todo el opio del que disponía –unas 400 toneladas– a cambio de 20 millones de dólares. Su idea fue objeto de varios debates en el Senado norteamericano y finalmente rechazada. "No acabarán con el problema ni aunque prosigan esta guerra durante otros sesenta años", dice.

"No soy más que una cabeza de turco para enriquecer a los burócratas de la DEA y a los agentes de narcóticos, que me necesitan para su propio beneficio. Las ganancias del mercado mundial de la droga se consiguen en Estados Unidos." Según Khun Sa sólo hay dos grupos de personas que desean erradicar verdaderamente el opio: los padres de los adictos y su pueblo.

El príncipe de la oscuridad tiene una respuesta preparada para quienes le hablan de la destrucción que provoca la heroína en los consumidores: "¿Le importa algo a Occidente el pueblo hambriento de Birmania? Si nos dan los recursos paa introducir cultivos sustitutivos podrán destruir nuestra heroína".

El kilo de opio se vende en el campo de Khun Sa por unas 40 libras esterlinas (unos 177 australes), mientras que en Londres llega a las 120.000 libras (aproximadamente 530.000 australes). Los campesinos que lo cultivan, en cambio, reciben por la misma cantidad sólo cuatro libras (18 australes).

Khun Sa dice que su ambición ahora es ser ministro de economía en un Estado Shan independiente. "La venta del opio es para ayudar a mi pueblo –insiste–, que es demasiado pobre para cultivar otra cosa. Lucho por la liberación de mi país."

Se ha puesto un precio de un millón de bhat tailandeses (unos 25.000 dólares) a la cabeza de Khun Sa. El, a su vez, ofrece unos 5000 bhat, unos 140 dólares, por cada agente de la DEA que lo busca.









Ronald Reagan: Cuando era estrella de la película *Hong Kong* enviaba cigarrillos a todos sus amigos en las navidades, según revelan los avisos publicitarios de la época. Siendo presidente dejó de fumar y comenzó a enviar armas a los contras.

LA CONTRA-COCAINA

Por Walter Goobar

Ronald Reagan ama a los contras y odia las drogas. El presidente norteamericano ha declarado públicamente su anhelo de alistarse como voluntario en estas dos cruzadas modernas. Durante un largo período, que se cortó abruptamente hace algunos meses, Reagan y su primera dama Nancy solían aludir con insistente frecuencia a estos dos temas, llegando incluso a anudarlos en uno solo, en todos y cada uno de los discursos que pronunciaban desde la Casa Rosada.

El 17 de julio de 1984 el diario *Washington Times*, de propiedad de la secta Moon, acusó al gobierno sandinista de Nicaragua de participar en el tráfico de drogas. El periódico basaba su informe en fuentes anónimas de la administración Reagan que citaban el testimonio de Federico Vaughan, un traficante de drogas convicto que había trabajado como informante norteamericano en Centroamérica.

El 16 de marzo de 1986, cuando aún se dudaba si el Congreso aprobaría la ayuda de 100 millones de dólares a los contras nicaragüenses, que finalmente concedió, Reagan declaraba a una cadena nacional de televisión: "Yo sé que los padres americanos que están preocupados por el problema de la droga se van a enfurecer al enterarse de que altos miembros del gobierno de Nicaragua están seriamente involucrados en el tráfico de drogas". En el momento adecuado la cámara mostró una fotografía en blanco y negro en la que se pudo ver un avión de carga de tipo C-123 K en una pista de aterrizaje cercana a Managua, cargado con lo que se decía era cocaína.

"Obviamente los sandinistas no dejan de lado ningún acto criminal. Es un régimen sin ley", remató Reagan.

Estados Unidos considera que la lucha contra el sandinismo y el narcotráfico deben reunirse en un mismo canal operativo de contrainsurgencia, con lo que se posibilita que los ejércitos sean autorizados para intervenir en situaciones internas y, de hecho, permite mantener en vigencia la Doctrina de Seguridad Nacional bajo el manto de la lucha contra el narcoterrorismo.

"Señor general: el ejército de mi país no tiene como hipótesis de conflicto la guerra contra el narcoterrorismo. Más aún, en el proyecto de Ley de Defensa enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, se estipula que las Fuerzas Armadas sólo pueden ser empleadas ante agresiones de origen externo", respondió el canciller Dante Caputo al ex comandante de la zona sur del ejército estadounidense y actual jefe de la OTAN en Europa, John Galvin.

"Nuestras fuerzas armadas no son policías internas", alcanzó a explicar diplomáticamente Caputo, al tiempo que Galvin se ponía la gorra ofuscado y enfilaba hacia la puerta del despacho ministerial, luego de un seco y poco protocolar "buenos días". Detrás de Galvin marchó el coronel Gómez Sabaini que, en noviembre próximo, oficiará como secretario de la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizará en Mar del Plata.

El escándalo de *Irangate* y más específicamente el juicio al coronel Oliver North han hecho que Ronald Reagan, en los últimos meses, evite las alusiones directas al narcoterrorismo. En el juicio contra North quedó establecido que el avión C-123 K que Reagan esgrimió como prueba de las vinculaciones del sandinismo con el narcotráfico, había sido comprado en 1984 por el general Richard Secord a la aerolínea Southern Air Transport (administrada por la CIA), provisto de cámaras ocultas y entregado a la Oficina Antinarcóticos (DEA) como parte del programa elaborado por Oliver North para conseguir apoyo y finanzas para los contras. Irónicamente, ese mismo C-123 K transportó en octubre de 1986 de Nicaragua a los EE.UU. al norteamericano Eugene Hasenfus, el piloto del avión abatido en territorio nicaragüense mientras realizaba tareas de aprovisionamiento de los contras.

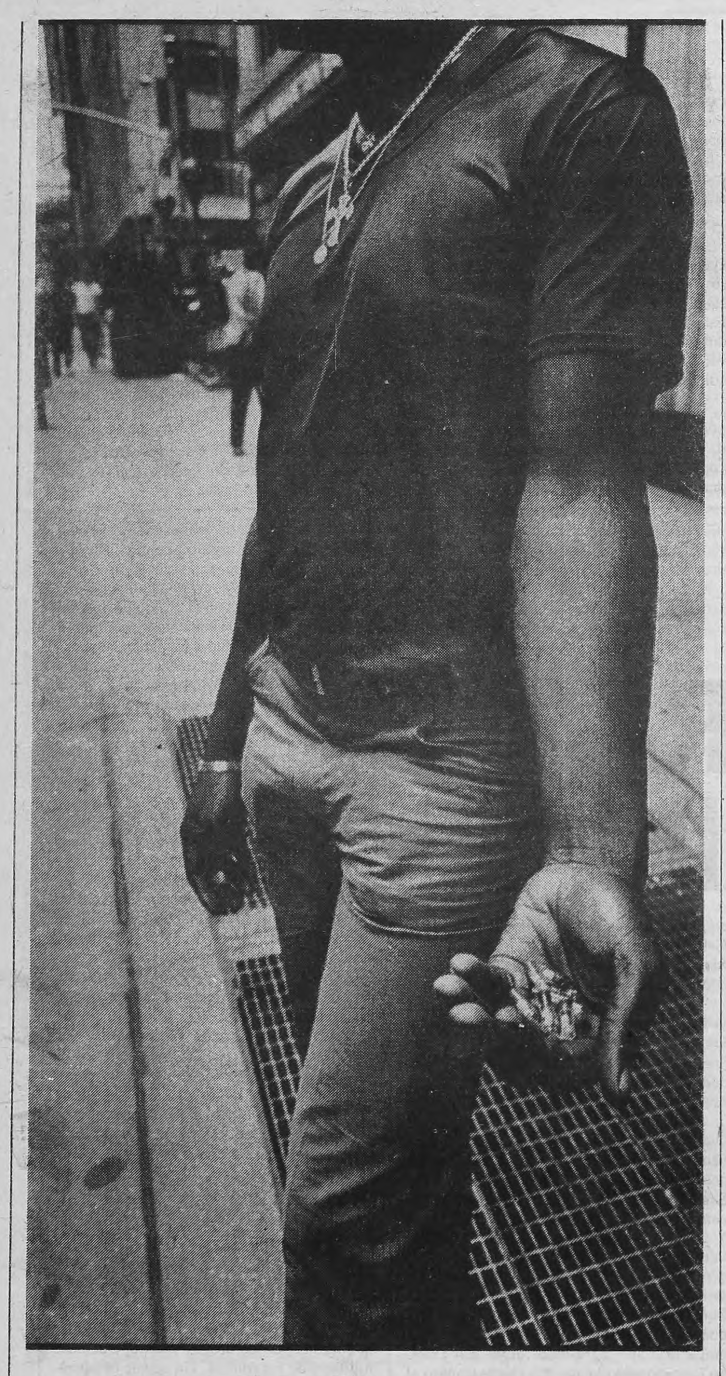
Un estudio realizado por la prestigiosa revista *Columbia Journalism Review* titulado "Narcoterrorismo: La historia de dos cuentos", señala que ninguna de las cadenas periodísticas norteamericanas mencionaron que en el proceso seguido contra Federico Vaughan, en Miami, no se encontraron evidencias sobre la pretendida vinculación de la dirigencia sandinista en el tráfico de drogas. En cambio, la participación de los contras en ese comercio ilegal fue sistemáticamente silenciada durante, por lo menos, los dos años en que el Congreso prohibía la ayuda a los antisandinistas –concluye la misma fuente–. A comienzos de 1985 dos experimentados periodistas de la agencia Associated Press, Brian Barger y Robert Parry, intentaron publicar una investigación de la que se desprendía que los aviones provistos por la CIA para el abastecimiento a los contras transportaban cocaína en los vuelos hacia los EE.UU. La investigación fue censurada y apareció publicada en forma parcial y distorsionada en el servicio español recién a fines de 1985. Parry y Barger finalmente renunciaron.

Según las evidencias reunidas por el senador demócrata por Massachusetts, John Kerry, para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, el tráfico de drogas constituyó uno de los pilares básicos de la doctrina Reagan para la democracia de América Central.

El caso de la familia de Jorge Ochoa, uno de los dos grandes exportadores de drogas de Colombia, es el que mejor ilustra las conexiones del gobierno estadounidense con esa actividad. Según los testimonios que obran en poder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la Agencia Central de Inteligencia obtenía la cocaína directamente del clan Ochoa en Colombia. Para transportar la sustancia la CIA reclutó pilotos que trasladaban la mercancía desde el norte de aquel país hasta los aeropuertos de reabastecimiento de combustible en la jungla de Costa Rica, donde se realizaba el entrecruzamiento entre el contrabando de drogas y las operaciones militares de los contras. Un agente de operaciones de la CIA, John Hull, permitía el aterrizaje de las avionetas de los traficantes para cargar combustible y almacenar la cocaína antes de que ésta fuese despachada hacia los EE.UU. A cambio, los traficantes pagaban derecho de uso por las pistas y en los viajes de vuelta desde Miami transportaban cargas para los antisandinistas.

En junio de 1987, el reputado periodista norteamericano Jack Anderson recibió una copia de las actas secretas de la sesión de la Dirección Nacional de Lucha contra la Droga, que presidió el fiscal general Edwin Meese, el 19 de febrero de este año. El director adjunto de la CIA Richard Kerr fue consultado sobre la supuesta participación cubana o nicaragüense en el narcotráfico: "Richard Kerr señaló que no existían pruebas para acusar al gobierno cubano y que la participación de los sandinistas habría sido esporádica". Los analistas en los crípticos mensajes que se manejan en los servicios de inteligencia y en la diplomacia interpretan que la declaración del jefe adjunto de la CIA apuntó a dar por cerrado el famoso episodio iniciado cuando el presidente Reagan blandió frente a las cámaras de televisión una foto en blanco y negro que supuestamente constituía la prueba definitiva contra el gobierno nicaragüense.

El estudio del *Columbia Journalism Review* cita a un anónimo ejecutivo de la influyente cadena CBS, que a modo de excusa explicó: "Para la primera historia había fotos. Independientemente de dónde hayan salido, parecían apoyar las tesis de la administración Reagan. En el caso de la historia de los contras, tendríamos que haber ido a América Central para seguirle el rastro".



ADICTOS A LA LEY

Por Adriana Schettini

En los últimos dos años la represión contra las drogas está en un nivel prioritario como nunca antes en nuestra política exterior'', dijo en Estados Unidos en marzo de 1986 el entonces asistente de la Oficina Internacional de Asuntos de Drogas del Departamento de Estado, Jon Thomas. El fiscal general de los Estados Unidos, Edwin Meese coincidía: ''El objetivo internacional de la administración Reagan es mantener, en todas las áreas geográficas claves, el control sobre el cultivo y la producción de drogas ilícitas que pueden ser exportadas a los Estados Unidos. Y el segundo objetivo –aclaró– es convertir el control de drogas en una cuestión importante de la política exterior y en una prioridad diplomática entre todas las naciones del mundo''.

Al comenzar la década de los ochenta, Estados Unidos contaba con el mayor número de consumidores de drogas de toda su historia y particularmente de cocaína y marihuana. ''Sin embargo, al consumidor deja de considerárselo como *enfermo*, tal como había sido en los años setenta en que imperaba un discurso médico jurídico, y se lo denomina *cliente* y *consumidor de sustancias ilícitas*'', explica Rosa del Olmo, profesora de criminología en la Universidad Central de Caracas. ''La preocupación central –sintetiza– es la droga procedente del exterior y, muy especialmente, los aspectos económicos y políticos del tráfico de cocaína.''

Esta preocupación económica, agudizada durante el gobierno de Reagan, encontró una explicación en el informe del Comité Económico Conjunto cuando, en 1983, señalaba que la economía subterránea de los Estados Unidos ocultaba 222.000 millones de dólares del Internal Revenue System (Impuesto sobre la Renta); es decir, el 7,5% del Producto Bruto Nacional. Sólo las drogas, se estiman como un negocio de más de 100.000 millones de dólares dentro de los Estados Unidos, lo que equivale al 10% de la producción industrial del país. ''Hoy parece necesario, ante todo, controlar la economía subterránea más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Así surge, para su legitimación, *el discurso jurídico transnacional*'', sostiene Rosa del Olmo en un trabajo inédito titulado *La cara oculta de la droga.* ''Las drogas producidas en el exterior –continúa– no debían llegar a los Estados Unidos ni tampoco debían escaparse los dólares de ese país, de acuerdo con la política económica proteccionista de la administración Reagan. Al ser la cocaína la más costosa (un kilo de cocaína tiene el mismo valor en el mercado que una tonelada de marihuana) y la que más ingresa al país del norte entre las llamadas drogas internacionales, el énfasis recae sobre ella.''

El discurso jurídico transnacional comienza con la ratificación por parte de los Estados Unidos en 1980 de la Convención Unica de Estupefacientes de 1961 de la ONU y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. No se podía implementar este nuevo plan sin acogerse, como lo habían hecho ya desde hacía varios años más de cien países, a la normativa internacional.

En 1981, el presidente Reagan firmó una enmienda al Posse Comitatus Act para la ayuda militar en la aplicación de la ley de parte de las fuerzas civiles y se dictó la orden ejecutiva Nº 12.333 que autorizó al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos a recoger información sobre el tráfico de drogas en el exterior porque ya se consideraba que los intentos para disminuir el uso indebido de las drogas en Estados Unidos debían combatirse en el extranjero. El gobierno de Reagan había declarado la guerra a las drogas.

Sin tolerancia

La prédica jurídica norteamericana tuvo eco. ''*Este es nuestro desafío: en las fronteras, en las calles, lucharemos juntos contra los traficantes de drogas. Los perseguiremos y los castigaremos hasta que desaparezcan de nuestra civilización. No habrá tolerancia*'', amenazaba un enorme cartel en la sala de reunión de la Conferencia Regional sobre Represión del Narcotráfico, realizada en Bariloche a fines del pasado mes de setiembre y organizada por la Aduana Argentina y el Servicio Aduanero de los Estados Unidos con la colaboración de la Oficina Internacional de Narcotráficos del Departamento de Estado.

Al encuentro asistieron representantes aduaneros de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay, Surinam, Guyana y Venezuela, además de los de los países organizadores y de los delegados de fuerzas de seguridad que operan contra el tráfico ilícito de drogas peligrosas como Interpol. Canadá, Panamá y Colombia, prefirieron no participar.

Los periodistas pasaron largas horas en los pasillos del Hotel Panamericano, sede del encuentro. Todo fue inútil: las puertas del Salón de las Américas permanecerían decididamente cerradas. ''Ustedes comprenderán que aquí ha habido discusiones que deben mantenerse en reserva. Caso contrario, nosotros estaríamos ofreciendo un flanco muy grande a los narcotraficantes'', se disculpó Juan Carlos Delconte, administrador general de Aduanas de la República Argentina. Y ante la insistencia de los cronistas ironizó: ''Que yo sepa, hasta el momento, los narcotraficantes no han organizado ninguna conferencia de prensa para manifestar qué medios van a usar o cómo van a accionar en el futuro''. ''Es que ellos prefieren la comunicación epistolar'', respondió un reportero gráfico en clara alusión al rey de la cocaína boliviana que, en una carta abierta dirigida al presidente Reagan, ofreció pagar la deuda externa de su país, para obtener a cambio la libertad de un pariente encarcelado en los EE.UU.

Al finalizar las deliberaciones los participantes hicieron escuetas declaraciones aunque sin ofrecer mayores detalles de lo tratado. Entre las recomendaciones surgidas de la conferencia se destaca que ''todos los países de la región deberán ayudar en el desarrollo y el uso de esfuerzos regionales de entrenamiento; que los países intercambien información entre ellos y con los organismos internacionales; que los Estados que tienen zonas de libre comercio examinen los controles aplicados en estas áreas para reducir la ocasión de usarlas como puntos para el narcotráfico''. Finalmente, se alentaba a los países a ''reforzar sus actividades de represión relacionadas con el problema de conspiración interna y examinar, ayudar y aplicar la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la necesidad de restringir el riesgo del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, llevadas por empresas de transportes comerciales''.

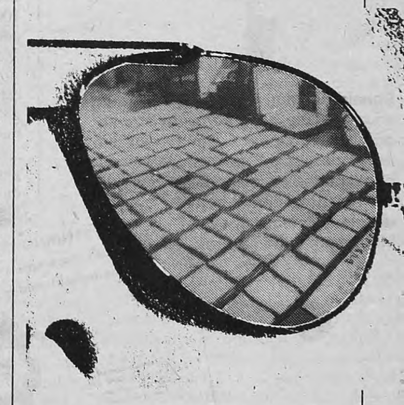
Al cierre de la reunión realizada en Bariloche, también se anunció que Estados Unidos concederá una ayuda de 350.000 dólares a la Argentina, suma que se distribuirá entre la Aduana, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. ''Esos 350.000 dólares serán destinados a armamentos, equipos de comunicaciones y transporte y elementos de informática utilizados en la lucha contra el narcotráfico'', manifestó Juan Carlos Delconte, administrador general de Aduanas. ''Si es necesario –insistió– se recurrirá al empleo de las Fuerzas Armadas y la Aeronáutica para emprender acciones contra el tráfico de drogas.''

El hábito del patíbulo

En esta cruzada contra el narcotráfico, veintitrés países –tan distintos como Irán o los estados norteamericanos de Arizona y Florida– castigan con pena de muerte los delitos relacionados con las drogas. Amnistía Internacional (AI) ha constatado la imposición de sentencias por ese motivo en catorce países y la consumación de ejecuciones en seis: China, Irán, Malasia, Singapur, Taiwan y Nigeria, aunque en este último país la pena capital para delitos vinculados con la droga fue abolida en 1986.

Según AI, el uso de la pena de muerte por el citado delito ha demostrado ser injusta y arbitraria. Quizás el caso más extremo sea el de Malasia, país en el que la posesión probada de 200 gramos de hachís es prueba suficiente para que el juez aplique, obligatoriamente, la pena capital. Allí, una pareja de ciudadanos fue condenada a muerte en julio de 1985 por la posesión de 412 gramos de cannabis. Sin embargo, la pena se transformó en cinco años de prisión cuando un abogado demostró en el recurso que sólo 198 gramos (dos menos de los que marca la ley) habían sido incautados en su domicilio. El resto de la droga se hallaba en el gallinero, donde –adujo– cualquiera la podía haber puesto. Dos gramos valieron dos vidas.

El informe de AI asegura que el índice de criminalidad no se ve afectado por la imposición de la pena de muerte. En la lucha contra el tráfico de estupefacientes, esta tesis resulta confirmada. En Irán, donde se han producido cientos de ejecuciones por este motivo



desde 1959 –muchas de ellas durante el actual régimen–, el consumo de drogas sigue creciendo en forma alarmante. En Malasia, país en el que la pena capital es obligatoria desde 1983 –ya era optativa desde 1975– por la posesión de más de 200 gramos de cannabis, 15 de heroína o 1000 de opio, las estadísticas oficiales muestran que el número de adictos ha pasado de 79.000 en 1979 a 110.000 en junio de 1986.

En la Argentina, Manuel de Anchorena, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Alianza Patriótica en las últimas elecciones, reclamó la urgente reimplantación de la pena de muerte para aplicarla a los narcotraficantes.